

No. 33945

**VENEZUELA
and
ARGENTINA**

**Agreement on the reciprocal promotion and protection of
investments (with protocol). Signed at Caracas on 16 No-
vember 1993**

Authentic text: Spanish.

Registered by Venezuela on 28 July 1997.

**VENEZUELA
et
ARGENTINE**

**Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques
des investissements (avec protocole). Signé à Caracas le
16 novembre 1993**

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par le Venezuela le 28 juillet 1997.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE INVERSIONES

El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina, denominado en adelante las "Partes Contratantes";

Con el deseo de intensificar la cooperación económica entre ambos países;

Con el propósito de crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;

Convencidas de que de esta manera contribuyen al progreso tecnológico y al bienestar económico de sus pueblos, así como al desarrollo de las relaciones de cooperación y amistad entre ellos;

Reconociendo que la promoción y la protección de tales inversiones sobre la base de un acuerdo contribuirá a estimular la iniciativa económica individual e incrementará la prosperidad en ambos Estados.

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1
DEFINICIONES

A los fines del presente Acuerdo:

1.- El término "inversor" designa:

a) toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación;

b) toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante;

c) toda persona jurídica efectivamente controlada por inversores de una Parte Contratante.

2.- El término "inversión" designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido

por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda;

b) acciones, cuotas societarias, y cualquier otro tipo de participación en sociedades;

c) títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico, los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén directamente vinculados a una inversión específica;

d) derechos de propiedad intelectual incluyendo, en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how, clientela y valor llave;

e) concesiones económicas conferidas por ley o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

3.- El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión, tales como utilidades, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.

4.- El término "territorio" designa el territorio nacional de cada Parte Contratante, incluyendo el mar territorial y aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual la Parte Contratante concernida pueda, de conformidad con el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción.

ARTICULO 2 ALCANCE DEL ACUERDO

1.- El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero las disposiciones del presente Acuerdo no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo que se originen en hechos o actos ocurridos antes de su entrada en vigor.

2.- Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión han estado domiciliadas desde hace más de dos años en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que la inversión fue admitida en su territorio desde el exterior.

ARTICULO 3 ADMISION

Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones.

ARTICULO 4 TRATAMIENTO

1.- Cada Parte Contratante, de conformidad con las normas y criterios del derecho internacional, asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

2.- Cada Parte Contratante, una vez que haya admitido en su territorio inversiones de inversores de la otra Parte Contratante, concederá plena protección legal a tales inversiones y les acordará un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o de inversores de terceros Estados.

3.- Sin perjuicio de las disposiciones del Párrafo (2), ninguna Parte Contratante estará obligada a extender a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, ventaja o privilegios que cada Parte Contratante acuerda a inversores de un tercer Estado como consecuencia de:

a) su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, o acuerdo de integración similar;

b) un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas,

c) los acuerdos bilaterales que proveen financiación concesional suscritos entre la República Argentina con la República de Italia el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de España el 3 de junio de 1988.

4.- Serán de obligatorio cumplimiento y estarán amparados por el presente Acuerdo las obligaciones que convenga una Parte Contratante con un inversor de la otra Parte Contratante respecto del tratamiento de su inversión.

ARTICULO 5 LIBRE TRANSFERENCIA

1.- Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante la transferencia irrestricta de las inversiones y ganancias, y en particular, aunque no exclusivamente de:

a) el capital y las sumas adicionales necesarias para la gestión, mantenimiento o ampliación de las inversiones;

b) los beneficios, utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;

c) los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el Artículo 1, Párrafo (1), (c);

d) las regalías y honorarios;

e) el producido de una venta o liquidación total o parcial de una inversión;

f) las compensaciones previstas en los Artículos 6 y 7;

g) los ingresos de los nacionales de una Parte Contratante que, de conformidad con las leyes de la otra Parte Contratante, presten sus servicios como directores, administradores, asesores, técnicos u obreros especializados en relación a una inversión de un inversor de aquella en el territorio de ésta.

2.- Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible, al tipo de cambio normal aplicable a la fecha de la transferencia, conforme con los procedimientos establecidos por la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, los cuales no podrán afectar la sustancia de los derechos previstos en este Artículo.

ARTICULO 6 EXPROPIACIONES

1.- Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga efecto equivalente, contra inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal.

2.- Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva. El monto de dicha compensación corresponderá al valor de mercado que la

inversión expropiada tenía inmediatamente antes de la expropiación o, si fuere superior, antes de que la expropiación inminente se hiciera pública, comprenderá intereses hasta la fecha de su pago a una tasa comercial normal, será pagada sin demora y será efectivamente realizable y libremente transferible.

ARTICULO 7 COMPENSACIONES POR DANOS

Los inversores de una Parte Contratante, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado por ésta última a sus propios inversores o a los inversores de un tercer Estado.

ARTICULO 8 SUBROGACION

1.- Si una Parte Contratante o una persona jurídica designada por ésta realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro para cubrir riesgos no comerciales que hubiere contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación en favor de aquella Parte Contratante o de la persona jurídica de que se trate respecto de cualquier derecho o título del inversor. La Parte Contratante o la persona jurídica de que se trate estará autorizada, dentro de los límites de la subrogación, a ejercer los mismos derechos que el inversor hubiera estado autorizado a ejercer.

2.- En el caso de una subrogación tal como se define en el Párrafo (1) de este Artículo, el inversor no interpondrá ningún reclamo a menos que esté autorizado a hacerlo por la Parte Contratante o la persona jurídica de que se trate.

ARTICULO 9 APLICACION DE OTRAS NORMAS

Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Acuerdo o si un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen normas, ya sean generales o específicas que otorguen a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Acuerdo, aquellas normas prevalecerán sobre el presente Acuerdo en la medida que sean más favorables.

ARTICULO 10
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE
LAS PARTES CONTRATANTES

1.- Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática.

2.- Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo de seis meses contado a partir del comienzo de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes a un tribunal arbitral.

3.- Dicho tribunal arbitral será constituido para cada caso particular de la siguiente manera. Dentro de los dos meses de la recepción del pedido de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, con la aprobación de ambas Partes Contratantes, será nombrado Presidente del tribunal. El Presidente será nombrado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la designación de los otros dos miembros.

4.- Si dentro de los plazos previstos en el Párrafo (3) de este Artículo no se hubieran efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en ausencia de otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a que proceda a los nombramientos necesarios. Si el Presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o cuando, por cualquier razón, se hallare impedido de desempeñar dicha función, se invitará al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, o si se hallare también impedido de desempeñar dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga inmediatamente en el orden de precedencia y no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes, será invitado a efectuar los nombramientos necesarios.

5.- El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su miembro del tribunal y de su representación en el procedimiento arbitral; los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados en principio por partes iguales por las Partes Contratantes. No obstante, el tribunal arbitral podrá determinar en su decisión que una mayor proporción de los gastos sea sufragada por una de las dos Partes Contratantes, y este laudo será obligatorio para ambas Partes Contratantes. El tribunal determinará su propio procedimiento.

ARTICULO 11
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSOR
Y LA PARTE CONTRATANTE RECEPTORA DE LA INVERSION

1.- Toda controversia entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, respecto del cumplimiento por ésta de las disposiciones del presente Acuerdo, será, en la medida de lo posible solucionada por consultas amistosas.

2.- Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor:

- o bien a los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión,

- o bien al arbitraje internacional en las condiciones descritas en el Párrafo (3).

Una vez que un inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3.- En caso de recurso al arbitraje internacional, el inversor y la Parte Contratante podrán convenir someterla:

a) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el Reglamento del Mecanismo Complementario del C.I.A.D.I. para la administración de procedimientos de conciliación, de arbitraje o de investigación;

b) a un tribunal de arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).

Si después de un período de tres meses a partir de la notificación del sometimiento de la controversia al arbitraje, no hubiese acuerdo sobre uno de los procedimientos alternativos antes mencionados, las partes en la controversia deberán someterla al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias

Relativo a Inversiones (C.I.A.D.I) o a su Mecanismo Complementario a los que se hace referencia en el inciso a) del presente Párrafo.

4.- El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Acuerdo, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión como así también a los principios del derecho internacional en la materia.

5.- La sentencia arbitral se limitará a determinar si ha habido incumplimiento del presente Acuerdo por la Parte Contratante de que se trate, si ese incumplimiento ha causado un daño al inversor y, si tal fuere el caso a fijar el monto de la correspondiente indemnización.

6.- Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su legislación.

7.- Cada Parte Contratante se compromete a no utilizar la vía diplomática respecto de las controversias a las que se refiere el presente Artículo a menos que la otra Parte Contratante deje de cumplir el laudo arbitral.

8.- El inversor y la Parte Contratante de que se trate podrán acordar cualquier otro medio de solución de las controversias que surjan entre ellos.

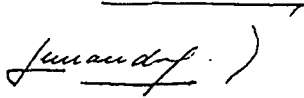
ARTICULO 12 ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION

1.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se notifiquen por escrito que han cumplimentado los respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo. Su validez será de diez años. Luego permanecerá en vigor hasta la expiración de un plazo de doce meses a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes notifique por escrito a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado este Acuerdo.

2.- Con relación a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de terminación de este Acuerdo se haga efectiva, las disposiciones de los artículos 1 a 11 continuarán en vigencia por un período de 10 años a partir de esa fecha.

Hecho en Caracas, el 16 de noviembre de 1993, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno
de la República de Venezuela:



FERNANDO OCHOA ANTICH
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno
de la República Argentina:



GUIDO DI TELLA
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

PROTOCOLO ANEXO

En el acto de la firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Argentina, los abajo firmantes han asimismo acordado las cláusulas siguientes, que forman parte integrante de dicho Acuerdo:

I.- En lo que concierne al Artículo 1, Párrafo 1, inciso c), las personas jurídicas que deseen invocar el presente Acuerdo podrán ser obligadas a proporcionar la prueba de dicho control. Serán aceptados entre otros, a título de prueba, los hechos siguientes:

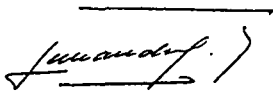
1.- El carácter de filial de una persona jurídica de una de las Partes Contratantes.

2.- Un porcentaje de participación en el capital de una persona jurídica que permita un control efectivo, tal como en particular, una participación superior a la mitad del capital.

3.- La posesión directa o indirecta de derechos de voto, que permitan tener una posición determinante en los órganos directivos de la persona jurídica o influir de otro modo de manera decisiva sobre su funcionamiento.

II.- Las remesas relativas a inversiones hechas en virtud de un programa de una Parte Contratante para el cambio de deuda pública en inversión se regirán por las disposiciones legales y contractuales aplicables.

Por el Gobierno
de la República de Venezuela:



FERNANDO OCHOA ANTICH
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno
de la República Argentina:



GUIDO DI TELLA
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF VENEZUELA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Argentine Republic, hereinafter referred to as “the Contracting Parties”;

Desiring to intensify economic cooperation between the two countries;

Determined to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Convinced that in so doing they are contributing to the technological progress and economic well-being of their peoples, as well as to the development of relations between them based on cooperation and friendship;

Recognizing that the promotion and protection of such investments through an agreement will help to stimulate individual business initiatives and will increase the prosperity of both States;

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

1. The term “investor” means:

(a) Any natural person having the nationality of one of the Contracting Parties, in accordance with its laws;

(b) Any legal entity constituted in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party and having its main office in the territory of that Contracting Party;

(c) Any legal entity effectively controlled by investors of one Contracting Party.

2. The term “investment” means, in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, every kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the laws of the latter. It includes in particular, but not exclusively:

(a) Movable and immovable property as well as any other property rights such as mortgages, guarantees and pledges;

(b) Shares, stocks and any other kind of participation in companies;

(c) Titles to money and claims to performance having an economic value, loans being included only when they are directly related to a specific investment;

¹ Came into force on 1 July 1995 by notification, in accordance with article 12.

(d) Intellectual property rights including, in particular, copyrights, patents, industrial designs, trade marks, trade names, technical processes, know-how, clientele and goodwill;

(e) Economic concessions granted by law or by virtue of a contract, including concessions for the prospection, cultivation, mining or development of natural resources.

3. The term “returns” means all amounts yielded by an investment, such as profits, dividends, interests, royalties and other current income.

4. The term “territory” means the national territory of either Contracting Party, including the territorial sea and those maritime areas adjacent to the outer limit of the territorial sea of the national territory, over which the Contracting Party concerned may, in accordance with international law, exercise sovereign rights or jurisdiction.

Article 2

SCOPE OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall apply to all investments made before or after the date of its entry into force, but the provisions of this Agreement shall not apply to any disagreement, claim or dispute arising from facts or events which predate its entry into force.

2. The provisions of this Agreement shall not apply to the investments made by natural persons who are nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party if such persons have, at the time of the investment, been domiciled in the latter Contracting Party for more than two years, unless it is proved that the investment was admitted into its territory from abroad.

Article 3

ADMISSION

Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.

Article 4

TREATMENT

1. Each Contracting Party shall, in accordance with the standards and rules of international law, at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of nationals of the other Contracting Party, and shall not impair by unjustified or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof.

2. Each Contracting Party shall, once it has admitted into its territory investments by investors of the other Contracting Party, accord to such investments full legal protection and treatment no less favourable than that accorded to investments of its own national investors or investors of third states.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph 2, neither Contracting Party shall be required to extend to the investments of investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, advantage or privilege which either Contracting Party accords to investors of a third state by virtue of:

(a) Its participation in or association with a free trade area, customs union, common market or any similar integration agreement;

(b) An international agreement relating wholly or in part to taxation issues;

(c) The bilateral agreements on concessional financing entered into by the Argentine Republic and the Italian Republic on 10 December 1987 and by the Argentine Republic and the Kingdom of Spain on 3 June 1988.

4. Any obligations entered into by one Contracting Party with an investor of the other Contracting Party relating to the treatment of the latter's investment shall be binding and protected by this Agreement.

Article 5

FREE TRANSFER

1. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party unrestricted transfer of investments and returns, in particular, but not exclusively:

(a) Capital and additional amounts necessary for the management, maintenance or development of the investments;

(b) Profits, gains, interests, dividends and other current income;

(c) Funds for the reimbursement of loans as defined in article 1, paragraph 2 (c);

(d) Royalties and fees;

(e) The proceeds from the sale or total or partial liquidation of an investment;

(f) The compensations provided for in articles 6 and 7;

(g) The savings of nationals of one Contracting Party who, in accordance with the laws of the other Contracting Party, are working as managers, administrators, advisers, technicians or specialized workers in connection with an investment by an investor of the former in the territory of the latter.

2. Transfers shall be effected without delay in freely convertible currency at the normal applicable exchange rate at the date of the transfer and in accordance with the procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made, which shall not affect the substance of the rights provided for in this article.

Article 6

EXPROPRIATIONS

1. Neither Contracting Party shall take any measures to expropriate or nationalize investments belonging to nationals of the other Contracting Party in its territory or take any measures having an equivalent effect, unless such measures are

taken in the public interest, on a basis of non-discrimination and under due process of law.

2. Such measures shall be accompanied by provisions for the rapid payment of adequate and effective compensation. The amount of such compensation shall represent the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is greater, shall include interest at a normal commercial rate until the date of payment, shall be paid without delay and shall be effectively realizable and freely transferable.

Article 7

COMPENSATION FOR DAMAGES

Investors of one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, treatment no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own nationals, or to nationals of a third state.

Article 8

SUBROGATION

1. If a Contracting Party or a legal entity designated by it makes a payment to an investor under a guarantee or bond to cover non-commercial risks taken in connection with an investment, the other Contracting Party shall recognize the validity of the subrogation of the Contracting Party or the legal entity concerned with regard to any right or title of the investor. The Contracting Party or legal entity concerned shall be authorized, within the limits of the subrogation, to exercise the same rights as the investor would have been authorized to exercise.

2. In a case of subrogation as defined in paragraph 1 of this article, the investor shall make no claim unless authorized to do so by the Contracting Party or legal entity concerned.

Article 9

APPLICATION OF OTHER RULES

If the provisions of the legislation of either Contracting Party or existing obligations under international law or obligations which may be established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement, or an agreement between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party, contain rules, whether general or specific, which accord to investments by investors of the other Contracting Party treatment more favourable than that established in this Agreement, those rules shall to the extent that they are more favourable prevail over this Agreement.

Article 10

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through the diplomatic channel.

2. If a dispute between the Contracting Parties cannot be thus settled within six months from the start of negotiations, it shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.

3. This arbitral tribunal shall be constituted in each case as follows: Within two months of receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint a member of the tribunal. Those two members shall elect a national of a third state, who, with the approval of both Contracting Parties, shall be chairman of the tribunal. The chairman shall be appointed within two months from the date on which the Contracting Parties appointed the other two members.

4. If the necessary appointments have not been made within the periods specified in paragraph 3 of this article, either Contracting Party may, if no other arrangement has been made, request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the Court is a national of either Contracting Party, or is otherwise prevented from acting, the Vice-President of the Court shall be requested to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party, or is also prevented from acting, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be requested to make the necessary appointments.

5. The arbitral tribunal shall take its decision by a majority of votes. Its decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall defray the expenses of its member of the tribunal and any expenses relating to its representation in the arbitral proceedings. The expenses of the Chairman, as well as any other expenses, shall in principle be shared equally by the Contracting Parties. However, the arbitral tribunal may rule in its decision that a larger share of the expenses should be paid by one of the Contracting Parties and such ruling shall be binding on both Contracting States. The tribunal shall determine its own procedures.

Article 11

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN AN INVESTOR AND THE CONTRACTING PARTY RECEIVING THE INVESTMENT

1. Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning fulfilment by the latter of the provisions of this Agreement, shall, as far as possible, be settled amicably.

2. Where the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Parties instigated it, it shall be submitted, at the request of the investor:

— Either to the competent tribunals of the Contracting Party in whose territory the investment was made.

— Or to international arbitration in accordance with the provisions of paragraph 3 below.

Once an investor has submitted the dispute to the jurisdictions of the Contracting Party concerned or to international arbitration, that choice of procedure shall be final.

3. In the case of international arbitration, the investor and the Contracting Party may agree to submit the dispute:

(a) To the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and the Nationals of Other States opened for signature in Washington on 18 March 1965,¹ provided that each State Party to this Agreement has acceded to it. If such is not the case, each Contracting Party shall agree to submit the dispute to arbitration in accordance with the Additional Facility Rules of ICSID for the management of conciliation, arbitration or inquiry proceedings;

(b) To an *ad hoc* arbitral tribunal established in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).²

If, three months after the date of notification of a request for arbitration, no agreement has been reached on the choice of one of the above procedures, the parties to the dispute shall submit it to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) or to its Additional Facility referred to in paragraph (a) above.

4. The arbitral tribunal shall make its decision on the basis of the provisions of this Agreement, the law of the Contracting Party concerned, including its norms relating to conflicts of law, the provisions of any other agreements relating specifically to investment, as well as the principles of international law in that area.

5. The arbitral decision shall be confined to determining whether there has been a breach of this Agreement by the Contracting Party concerned and whether that breach damaged the interests of the investor and, if necessary, to setting the amount of compensation to be paid.

6. The arbitral decisions shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall execute them in accordance with its laws.

7. Each Contracting Party undertakes not to use the diplomatic channel in connection with disputes referred to in this article unless the other Contracting Party has failed to comply with the arbitral award.

8. The investor and the Contracting Party concerned may agree on any other method for resolving disputes which may arise between them.

Article 12

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties notify each other in writing that they have fulfilled their respective constitutional requirements for the entry into

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.

² United Nations, *Official Records of the General Assembly, Thirty-first Session, Supplement No. 17 (A/31/17)*, p. 34.

force of this Agreement. It shall remain in force for 10 years. It shall remain in force thereafter until 12 months after the date on which one Contracting Party notifies the other in writing that it has decided to terminate the Agreement.

2. In the case of investments made prior to the date of notification of termination of this Agreement, the provisions of articles 1 to 11 shall remain in force for a period of 10 years starting on that date.

DONE at Caracas on 16 November 1993, in two originals in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Republic of Venezuela:
FERNANDO OCHOA ANTICH
Minister for Foreign Affairs

For the Government
of the Argentine Republic:
GUIDO DI TELLA
Minister for Foreign Affairs,
International Trade and Worship

PROTOCOL

At the time of the signing of the Agreement on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments between the Government of the Republic of Venezuela and the Government of the Republic of Argentina, the undersigned plenipotentiaries have agreed on the following provisions, which form an integral part of this Agreement:

I. Concerning article 1, paragraph 1, subparagraph (c), the legal entities that wish to invoke this Agreement shall be obliged to furnish proof of said control. The following will be accepted as title of proof:

1. The subsidiary nature of a legal entity of one of the Contracting Parties;
2. A percentage of participation in the capital of one legal entity which permits effective control, such as, in particular, participation greater than one half of the capital;
3. The possession, direct or indirect, of voting rights, which allow for holding a decisive position on the main organs of the legal entity or for influencing decisively in another manner its functioning.

II. The payments in relation to the investments made in virtue of a programme of one Contracting Party for the conversion of the public debt in investments are governed by the applicable legal and contractual provisions.

For the Government
of the Republic of Venezuela:
FERNANDO OCHOA ANTICH
Minister for Foreign Affairs

For the Government
of the Republic of Argentina:
GUIDO DI TELLA
Minister for Foreign Affairs,
International Affairs and Worship

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,

Désirant intensifier la coopération économique entre les deux pays,

Entendant créer et maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre,

Convaincus qu'en procédant de la sorte ils contribueront au progrès technologique et au bien-être économique des deux peuples ainsi qu'au développement de leurs relations de coopération et d'amitié,

Reconnaissant que la promotion et la protection de ces investissements par voie d'accord contribueront à stimuler l'initiative économique individuelle et accroîtront la prospérité dans les deux Etats,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

1. L'expression « investisseur » s'entend :

a) De toute personne physique qui est un ressortissant d'une Partie contractante, conformément à la législation de cette Partie contractante;

b) De toute personne morale constituée conformément aux lois et règlements d'une Partie contractante et qui a son siège sur le territoire de cette Partie contractante;

c) De toute personne morale effectivement contrôlée par des investisseurs d'une Partie contractante.

2. L'expression « investissement » s'entend, conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle a été effectué l'investissement, des avoirs de toute nature investis par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à la législation de cette dernière. Elle couvre en particulier — mais non limitativement :

a) La propriété des biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, cautions et gages;

b) Les actions, droits de participation à des sociétés et toutes autres formes de participation à des sociétés;

¹ Entré en vigueur le 1^{er} juillet 1995 par notification, conformément à l'article 12.

c) Les créances et droits à prestation ayant une valeur économique — les prêts ne sont inclus que lorsqu'ils sont directement liés à un investissement précis;

d) Les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur, les brevets, les dessins industriels, les marques, les noms commerciaux, les procédés techniques, les savoir-faire, la clientèle et la survaleur incorporelle;

e) Les concessions économiques accordées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles.

3. L'expression « revenu » s'entend de tous les produits d'un investissement, tels que bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres revenus courants.

4. L'expression « territoire » s'entend du territoire national de l'une ou l'autre Partie contractante, y compris de la mer territoriale et des zones maritimes adjacentes à la limite extérieure de la mer territoriale du territoire national, sur lequel la Partie contractante intéressée peut, en vertu du droit international, exercer des droits souverains ou une juridiction.

Article 2

PORTÉE DE L'ACCORD

1. Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, mais ses dispositions ne s'appliquent à aucun litige, aucune réclamation ni aucun différend qui tiennent à des faits ou des actes survenus avant ladite entrée en vigueur.

2. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux investissements réalisés par des personnes physiques qui sont des ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante si, à la date de l'investissement, ces personnes sont domiciliées depuis plus de deux ans sur le territoire de cette autre Partie contractante, sauf à prouver que l'investissement initial admis sur ce territoire provenait de l'extérieur.

Article 3

ADMISSION

Chaque Partie contractante encourage sur son territoire les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Article 4

TRAITEMENT

1. Chaque Partie contractante, en conformité avec les normes et critères du droit international, assure à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, et s'abstient d'en entraver la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou la disposition par des mesures injustifiées ou discriminatoires.

2. Chaque Partie contractante, une fois qu'elle a admis sur son territoire des investissements d'investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investissements une entière protection juridique et un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres ressortissants ou des ressortissants d'Etats tiers.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un quelconque traitement, avantage ou privilège qu'elle accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en raison :

a) De sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, à une union douanière, à un marché commun ou à un accord d'intégration similaire;

b) D'un accord international se rapportant en tout ou en partie à des questions d'imposition;

c) Des accords bilatéraux qui fournissent le financement à des conditions de faveur, suscrits entre la République argentine et la République du Venezuela le 10 décembre 1987 et avec le Royaume d'Espagne le 3 juin 1988.

4. N'importe quelle obligation convenue par une Partie contractante avec un investisseur de l'autre Partie contractante au sujet du traitement de son investissement sera obligatoire et protégée par le présent Accord.

Article 5

TRANSFERT LIBRE

1. Chacune des Parties contractantes autorise sans délai injustifié les investisseurs de l'autre Partie contractante à transférer librement des investissements et des produits, en particulier mais non exclusivement :

a) Du capital et des sommes supplémentaires nécessaires à la gestion, au maintien et au développement des investissements;

b) Des bénéfices, des plus-values, des intérêts, des dividendes et des autres revenus courants;

c) Des fonds en remboursement d'emprunts comme définis à l'alinéa du paragraphe 2 de l'article 1;

d) Des redevances et des droits;

e) Des produits de la vente ou de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;

f) Des réparations prévues aux articles 6 et 7;

g) Des épargnes des ressortissants d'une Partie contractante, qui, conformément à la législation interne de l'autre Partie contractante, travaillent comme les directeurs, les administrateurs, les conseillers, les techniciens ou les travailleurs spécialisés au sujet d'un investissement par un investisseur de la première dans le territoire de la dernière.

2. Les transferts seront effectués sans délai dans les devises librement convertibles aux taux de change normaux et applicables au jour de transfert et conformément à la procédure établie par la Partie contractante dans le territoire de qui l'investissement était faite, qui n'aura pas des conséquences sur la substance des droits stipulés au présent article.

Article 6

EXPROPRIATIONS

1. Aucune Partie contractante ne prend de mesures de nationalisation ou d'expropriation ou autre mesure d'effet équivalent à l'encontre des investissements qui, situés sur son territoire, appartiennent à des investisseurs de l'autre Partie contractante, à moins qu'il s'agisse de mesures prises pour cause d'utilité publique, sur une base non discriminatoire et dans le respect des procédures juridiques requises.

2. Ces mesures sont assorties de dispositions prévoyant une indemnisation prompte, adéquate et effective. Le montant de l'indemnité correspond à la valeur marchande des investissements expropriés immédiatement avant l'expropriation, ou avant que l'imminence de l'expropriation ait été rendue publique si la valeur marchande était alors supérieure; il comporte les intérêts à un taux commercial normal jusqu'à la date du paiement; il est versé sans délai et il est effectivement réalisable et librement transférable.

Article 7

DÉDOMMAGEMENTS

Les investisseurs d'une Partie contractante qui, du fait d'une guerre ou d'un autre conflit armé, d'un état d'urgence nationale, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une rébellion, subissent des pertes quant aux investissements qu'ils ont effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficient, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation, du dédommagement ou de tout autre règlement, d'un traitement non moins favorable que celui accordé par cette Partie contractante à ses propres investisseurs ou à ceux d'un Etat tiers.

Article 8

SUBROGATION

1. Si une Partie contractante ou une personne morale désignée par elle fait un paiement à un investisseur au titre d'une garantie ou d'une assurance destinée à couvrir les risques non commerciaux encourus en rapport avec un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation en faveur de la première Partie contractante ou de la personne morale concernée à l'égard de tout droit ou titre de l'investisseur. La Partie contractante ou la personne morale concernées sont autorisées, dans les limites de la subrogation, à exercer les mêmes droits que ceux que l'investisseur aurait été autorisé à exercer.

2. En cas de subrogation telle que définie au paragraphe 1 du présent article, l'investisseur ne fait valoir aucune prétention sauf à y être autorisé par la Partie contractante ou la personne morale concernée.

Article 9

APPLICATION D'AUTRES RÈGLES

Si les dispositions législatives de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations découlant actuellement du droit international ou ultérieurement sous-

crites entre les Parties contractantes en sus du présent Accord ou bien un accord particulier entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante contiennent des règles, générales ou particulières, accordant aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ces règles prévalent sur les dispositions du présent Accord dans la mesure où elles sont plus favorables.

Article 10

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Les différends éventuels entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont, dans la mesure du possible, réglés par la voie diplomatique.

2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut pas être réglé de cette manière dans le délai de six mois à compter du début des négociations, il est, sur demande de l'une ou l'autre Partie contractante, soumis à un tribunal arbitral.

3. Le tribunal arbitral est constitué au cas par cas de la manière suivante. Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie contractante désigne un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent un ressortissant d'un Etat tiers qui, avec l'approbation des deux Parties contractantes, est nommé Président du tribunal. Le Président est nommé dans le délai de deux mois à compter de la date de la désignation des deux autres membres.

4. Si, dans les délais spécifiés au paragraphe 3 du présent article, il n'a pas été procédé aux désignations nécessaires, l'une ou l'autre Partie contractante peut, faute d'un autre arrangement, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Au cas où le Président serait un ressortissant d'une Partie contractante ou s'il est empêché pour une quelconque raison de s'acquitter de cette fonction, le Vice-Président de la Cour est invité à procéder aux nominations requises. Si ce dernier est lui-même un ressortissant d'une Partie contractante ou s'il est empêché lui aussi, le membre de la Cour venant immédiatement à sa suite par ordre de préséance et qui n'est pas un ressortissant d'une Partie contractante est invité à procéder aux nominations requises.

5. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. La décision est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Chaque Partie contractante prend à sa charge les frais afférents à son membre du tribunal et à sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais du Président et les autres frais sont en principe pris en charge à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal peut toutefois disposer dans sa décision qu'une proportion supérieure des frais sera prise en charge par l'une des deux Parties contractantes, et cette sentence est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Le tribunal arrête sa propre procédure.

Article 11

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET LA PARTIE CONTRACTANTE QUI REÇOIT L'INVESTISSEMENT

1. Tout différend entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante relatif à l'application par celle-ci des dispositions du présent Accord est, dans la mesure du possible, réglé par voie de consultations amiables.

2. Si le différend ne peut être réglé dans le délai de six mois à compter du moment où l'une des parties au différend l'a soulevé, il peut être soumis, à la demande de l'investisseur :

- Ou bien aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué;
- Ou bien à l'arbitrage international dans les conditions décrites au paragraphe 3.

Une fois qu'un investisseur a soumis le différend aux juridictions de la Partie contractante en cause ou à l'arbitrage international, le choix fait de l'une ou de l'autre procédure est définitif.

3. En cas de recours à l'arbitrage international, l'investisseur et la Partie contractante peuvent convenir de le soumettre :

a) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965¹, si les deux Parties contractantes ont accédé à ladite Convention. Tant que cette condition ne sera pas remplie, les deux Parties contractantes consentent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement applicable dans le cadre du Mécanisme supplémentaire du CIRDI pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits;

b) A un tribunal d'arbitrage *ad hoc* établi conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI)².

Si, à l'expiration d'une période de trois mois à compter de la notification de la soumission du différend à l'arbitrage, l'accord ne s'est pas fait sur l'une des procédures susmentionnées, les parties au différend doivent soumettre celui-ci au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou au Mécanisme supplémentaire du CIRDI visé à l'alinéa a du présent paragraphe.

4. L'organe arbitral rend sa décision sur la base des dispositions du présent Accord, du droit de la Partie contractante partie au différend, y compris les normes en matière de conflits de lois, des clauses des accords particuliers éventuellement conclus en rapport avec l'investissement, et également des principes du droit international en la matière.

5. La sentence arbitrale se limite à déterminer s'il y a eu manquement au présent Accord imputable à la Partie contractante en cause, si ce manquement a causé un dommage à l'investisseur et, dans l'affirmative, à fixer le montant de l'indemnité correspondante.

6. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante les exécute en conformité avec sa législation.

7. Chaque Partie contractante s'engage à ne pas recourir à la voie diplomatique pour les différends auxquels se réfère le présent article à moins que l'autre Partie contractante manque de se conformer à la sentence arbitrale.

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 575, p. 159.

² Nations Unies, *Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-et-unième session, Supplément n° 17 (A/31/17)*, p. 36.

8. L'investisseur et la Partie contractante concernés peuvent convenir d'un quelconque autre mode de règlement de leurs éventuels différends.

Article 12

ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET CESSATION

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées par écrit l'accomplissement des formalités constitutionnelles respectives requises de leur part à cet effet. La durée de sa validité sera de dix ans. Par la suite, il restera en vigueur jusqu'à expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la notification écrite faite par une Partie contractante à l'autre Partie contractante de sa décision d'y mettre fin.

2. Pour ce qui est des investissements effectués avant la date de la prise d'effet de la notification d'abrogation du présent Accord, les dispositions des articles premier à 11 leur resteront applicables pendant une période de dix ans à compter de cette date.

FAIT à Caracas le 16 novembre 1993, en deux originaux en langue espagnole, les deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela :

Le Ministre des relations extérieures,

FERNANDO OCHOA ANTICH

Pour le Gouvernement
de la République argentine :

Le Ministre des relations extérieures,
du commerce international et du culte,

GUIDO DI TELLA

PROCOLE

Au moment de signer l'Accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements entre le Gouvernement de la République du Venezuela et le Gouvernement de la République argentine, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante de l'Accord :

I. En ce qui concerne l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article premier, les personnes morales souhaitant invoquer le présent Accord peuvent être tenues de fournir la preuve du contrôle dont il est question. Sont notamment reçus à titre de preuve :

1. La qualité de filiale d'une personne morale d'une Partie contractante;
2. Un pourcentage de participation au capital d'une personne morale qui permette d'exercer un contrôle effectif — ainsi, en particulier, une participation supérieure à la moitié du capital;
3. La détention directe ou indirecte de droits de vote qui permettent d'occuper une position déterminante au sein des organes directeurs de la personne morale ou d'influer autrement, d'une manière décisive, sur son fonctionnement.

II. Les paiements en rapport avec des investissements effectués en vertu d'un programme d'une Partie contractante visant à la conversion de la dette publique en investissement sont régis par les dispositions légales et contractuelles applicables.

Pour le Gouvernement
de la République du Venezuela :

Le Ministre des relations extérieures,

FERNANDO OCHOA ANTICH

Pour le Gouvernement
de la République argentine :

Le Ministre des relations extérieures,
du commerce international et du culte,

GUIDO DI TELLA

